



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa

DEMANDANTE: Jhon Alexander Jiménez Acevedo y otros

DEMANDADO: Fiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa-
Policía Nacional- Ministerio de Justicia

RADICACIÓN: 150013333 014 2016 000117 00

ASUNTO

El proceso ingresó al Despacho para resolver la solicitud de modificación de costas elevada por la parte actora

ANTECEDENTES

1. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia en el asunto de la referencia el 10 de noviembre de 2017, condenando a los demandados, entre otras cosas, al pago de las costas procesales, para lo cual fijó como agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones concedidas (869).
2. Ante el traslado de ese Despacho al Circuito Judicial de Duitama, el proceso fue repartido a este Juzgado quien el 12 de abril de 2018, celebró la audiencia de que trata el inciso 4 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, para la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fl. 943)
3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia de 27 de septiembre de 2018, confirmó y modificó la sentencia de primera instancia, y se abstuvo de condenar en costas (fl. 986-1017).
4. El apoderado de la parte accionante solicitó aumentar el porcentaje de agencias en derecho fijado por el Juzgado Quince Administrativo de Tunja, al considerar que este no se compadece con la gravedad de los daños sufridos por los accionantes y la omisión de las accionadas.

De igual modo, aseguró que estas debieron tasarse de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo PASAA16 de 10554 de 05 de agosto de 2016, por ser la norma vigente para la fecha de iniciación del proceso, y que no es suficiente la argumentación señalada por *el a-quo* para determinar el monto, pues a su juicio, se desconoció el acervo probatorio y las acciones que debieron encaminarse a lograr comprobar la responsabilidad de la administración pública.

CONSIDERACIONES.

El artículo 302 del Código General del Proceso establece que las decisiones judiciales susceptibles de recursos, cobran firmeza cuando queda ejecutoriada la providencia que los resuelva.

A su vez, el artículo 303 *ibídem* dispone que la sentencia ejecutoriada en el proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada y, por tanto, *“resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”*¹.

La importancia jurídica y social de la institución de la cosa juzgada se explica por su propia finalidad: conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, y procurar que el proceso cumpla un papel eficaz en la solución de los conflictos, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido una y otra vez en los estrados judiciales. De esta manera, se tiene que la cosa juzgada cumple dos funciones: una positiva que reside en ofrecer seguridad jurídica a los asociados y otra negativa que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar asuntos que ya han sido resueltos².

En ese orden, descendiendo al asunto bajo examen, y de conformidad con los antecedentes reseñados, el Despacho encuentra que no hay lugar acceder a la solicitud del mandatario del extremo accionante, por cuanto, como él mismo lo señaló, las agencias fueron fijadas en la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2017, la cual fue recurrida únicamente por la Fiscalía General de la Nación, apelación que fue resuelta el Superior Funcional el 27 de septiembre de 2017, decisión notificada a las partes el 01 de octubre de 2018 (fl. 1018), quedando en firme el día 04 del mismo mes y año, momento en el cual, según la normas citadas la decisión que puso fin al debate planteado cobró ejecutoria e hizo tránsito a cosa juzgada, tornándose inmodificable y obligatoria.

Entonces, si el mandatario se encontraba inconforme con la decisión adoptada frente a las agencias en derecho, debió proponer el recurso de alzada, a fin de que la segunda instancia se pronunciara al respecto, pero no hizo reproche alguno al respecto, y el Superior tampoco consideró pertinente referirse sobre el asunto; por consiguiente, el numeral noveno de la parte resolutive de la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2017, que fijó las agencias en derecho en el 1% de las pretensiones concedidas, no puede ser objeto de discusión en esta etapa procesal, pues, se reitera ello implicaría desconocer la institución jurídica de la cosa juzgada y de contera, el principio de seguridad jurídica.

En gracia de discusión, si se aceptará que este Despacho está facultado para efectuar dicha modificación, es pertinente advertir que la demanda se radicó el 20 de febrero de 2015, ante el Tribunal Administrativo de Boyacá (fl. 530), que consideró carecer de competencia y remitió el expediente a los Juzgados Administrativos de esta ciudad, de tal suerte que la norma a aplicar para la determinación de las

¹ Corte Constitucional, sentencia C-522 de 4 de agosto de 2009, exp. D-7580, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

² Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, exp. D-6668, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

agencias en derecho era la vigente a esa fecha, esto es, el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del mismo año, estatuto que tratándose de procesos ordinarios de primera instancia permitía establecer como tales hasta el 15% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas; es decir que la decisión adoptada se encuentra enmarcada dentro de dicho parámetro.


Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Denegar la solicitud efectuada por el apoderado de la parte demandante, relacionada con aumentar las agencias en derecho fijadas en la sentencia de 10 de noviembre de 2017, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Una vez en firme esta decisión, por Secretaría **practicar** la liquidación de costas fijadas en primera instancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

³CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

Nº 6 De Hoy 15 de febrero de 2019
a las 8:00 a.m.


FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 15 de febrero de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández-- Secretario